

LA INSCRIPCIÓN DE LA FILIACIÓN DERIVADA DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. PROBLEMAS ACTUALES

MARÍA VICTORIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil

Universidad de Alcalá

Resumen: El artículo 10 de la LTRHA establece la nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución. Para evitar la aplicación de este precepto ciudadanos españoles han recurrido a otros ordenamientos jurídicos que admiten la posibilidad de que convertirse en padres del niño nacido de una mujer con la que se ha suscrito un contrato de “vientre de alquiler” y posteriormente solicitar la inscripción de la filiación a su favor en nuestro Registro Civil. En este trabajo se analiza la legalidad o no de esta actuación y la posición que al respecto existe por parte de la DGRN y de la jurisprudencia.

Palabras clave: Gestación por sustitución. Nulidad. Inscripción. Filiación. Registro civil.

Abstract: The contract of mother-subrogate is forbidden in our law. So, the people who want to a child go to other countries to celebrate a legal contract of mother-subrogate. After, when the child is born, they want to enrol the child in the Spanish civil registry.

Keywords: Contract of mother-subrogate. Nullity. Enroll. Signalment. Civil Registry.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES GENERALES. II. LA FILIACIÓN DERIVADA DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 1. El artículo 10 de la LTRHA. 2. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009. 3. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valencia de 15 de septiembre de 2010. 4. La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2010. 5. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011. III. BIBLIOGRAFÍA.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

La primera ley de reproducción asistida que se aprobó en España fue la Ley 35/1988, de 22 noviembre¹, cuyo principal objetivo fue admitir las técnicas de reproducción humana que permitieran superar una posible esterilidad en la

¹ BOE nº 282, de 24 de noviembre de 1988; Rect. BOE nº 284, de 26 de noviembre de 2011. Esta Ley toma como punto de partida las conclusiones del denominado Informe Palacios realizado por la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artificial Humanas aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en la sesión del 10 de abril de 1986.

pareja². Dicha Ley fue modificada por la Ley 45/2003 de 21 de noviembre³ para limitar a tres el máximo de ovocitos que se podían generar en cada ciclo reproductivo. Finalmente, se aprobó la Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida⁴ (en adelante LTRHA) que deroga la normativa anterior y contiene el actual régimen jurídico en materia de reproducción asistida, entendiendo por tal, tanto la inseminación artificial como la fecundación *in vitro* y sus distintas técnicas⁵.

La LTRHA dedica sus artículos 7, 8, 9 y 10 a la filiación de los nacidos mediante estas técnicas de reproducción. Para determinar dicha filiación el artículo 7 LTRHA en su nº 1 contiene una remisión a las leyes civiles, salvando las especificidades previstas por los artículos 8 a 10 del mismo cuerpo legal. Por lo tanto, serán los artículos 108 y siguientes del Código civil los que contendrán las reglas aplicables en materia de filiación, así como las leyes forales que regulen dicha materia. En este último sentido, cabe citar el Capítulo V (De la filiación) de la Ley 25/2010, de 19 de julio, por la que se aprueba el Libro II del Código Civil de Cataluña, relativo a la Persona y Familia; los artículos 56 y siguientes de Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el Título de “Código Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes Civiles aragonesas y finalmente el Título V (De la patria potestad y filiación), de la Ley 1/1973, de 1 de marzo por la que se aprueba la Compilación de Derecho civil Foral de Navarra.

Fundamentalmente, son tres las particularidades que definen la filiación cuando se han utilizado técnicas de reproducción artificial; el consentimiento que se exige a los cónyuges (del mismo o distinto sexo) o integrantes pareja de hecho para que se pueda practicar la técnica, manifiesta la obligación de asumir la filiación (matrimonial o no matrimonial) que se derive del nacimiento del niño y ello con independencia de la procedencia del material reproductor. En segundo lugar, la regulación de la fecundación de la mujer tras la muerte de su marido o pareja de hecho y en tercer lugar, la regulación de la gestación por sustitución, que es respecto de la que vamos a extendernos en este trabajo.

² LASARTE ÁLVAREZ, C.: “La reproducción asistida y la prohibición legal de maternidad subrogada admitida de hecho por vía reglamentaria”, en *Diario la Ley*, (Sección Doctrina), nº 7777, enero de 2012, (La ley 22179/2011), p. 2.

³ BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003.

⁴ BOE nº 126, de 27 de mayo de 2006.

⁵ No obstante, la LTRHA también ha sido objeto de algunas reformas. La primera en el año 2007 introducida por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que adecua la normativa de la LTRHA a la nueva realidad de los matrimonios integrados por personas del mismo sexo, añadiendo un nº 3 en el artículo 7. La segunda modificación se ha producido de la mano de la Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que tanto la información como el consentimiento relacionados con las técnicas de reproducción asistida se tienen que realizar en formatos adecuados, siguiendo las reglas establecidas por el principio de diseño para todos, de forma que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

Debido a la prohibición contenida en el artículo 14 de la CE relativa a la no discriminación por razón de nacimiento o de filiación, las inscripciones en el Registro Civil de los niños nacidos como consecuencia de estas técnicas no han de tener un trato diferenciado del resto de las inscripciones de nacimiento o filiación. Por tanto, desde la óptica del Registro Civil, no existen diferencias en el tratamiento de la inscripción de la filiación en el caso de la utilización de las técnicas de reproducción asistida. En esta idea ahonda el artículo 7 LTRHA cuando en su número 2 establece que en ningún caso la inscripción en el Registro reflejará datos de los que pueda inferirse el carácter de la generación.

Por tanto, la inscripción de la filiación de estos nacidos será matrimonial o no matrimonial en función del juego de las reglas establecidas en los artículos 108 y ss del Código civil o la legislación foral correspondiente. Sin embargo, llegados a este punto no quiero dejar de señalar que con la entrada en vigor de la nueva Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011⁶ esta distinción no tendrá acceso al Registro Civil, puesto que tal y como establece su Exposición de Motivos se elimina toda referencia a la filiación no matrimonial, con plena equiparación a la matrimonial⁷.

II. LA FILIACIÓN DERIVADA DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN

1. El artículo 10 de la LTRHA

Entre los distintos casos de reproducción asistida regulados por la LTRHA aparece recogido el de la gestación por sustitución; esto es, aquella que tiene lugar en virtud de un contrato, oneroso o no, por el que una mujer consiente en llevar a cabo una gestación, utilizando técnicas de reproducción asistida, con la obligación de entregar el recién nacido a la otra parte del contrato o comitente. El comitente puede ser una sola persona o una pareja. En virtud de este contrato la mujer gestante puede obligarse también a aportar su óvulo, que es fecundado con el esperma del padre comitente (maternidad subrogada plena) o bien, únicamente aporta su útero para la gestación de un embrión, resultado de la fecundación del óvulo de otra mujer y los espermatozoides del padre comitente o donante (maternidad subrogada gestacional).

En consecuencia, en virtud de este contrato, la gestación por sustitución puede suponer que la mujer gestante sólo aporte su útero y la pareja comitente aporte su material reproductor previamente fecundado, que se implantaría en el útero de la primera para su gestación. También puede ocurrir que madre gestante aporte sus propios óvulos que serán fecundados por los gametos del varón

⁶ BOE 22 de julio de 2011. El plazo de entrada en vigor es de 3 años tal y como dispone la Disposición final décima.

⁷ Un estudio crítico de la nueva ley del registro civil la realiza ESPINAR VICENTE, J.M.: “Algunas reflexiones sobre la nueva Ley del Registro civil” en *Diario la Ley* (Sección Doctrina), nº 7771, enero 2012. (LA LEY 22116/2011).

comitente o de otro varón. Pero también, puede ocurrir que el material reproductor implantado en el útero de la mujer gestante no provenga de los comitentes sino de terceras personas ajenas al contrato.

La LTRHA en su artículo 10 declara “*nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero*” y, en consecuencia, declara que la filiación materna quedará determinada por el parto; de manera que la mujer gestante será, desde el punto de vista legal, la madre del niño nacido y ello con independencia de la procedencia del material reproductor⁸. En consecuencia, la filiación se inscribirá a nombre de la madre y ésta no podrá manifestar la identidad del padre a no ser que esté ya determinada (art. 122 Cc).

Esta sanción de nulidad es coherente con el sistema establecido en nuestro ordenamiento jurídico puesto que este contrato sería sancionado con la misma nulidad absoluta por ilicitud de la causa (art. 1275 Cc) y por estar su objeto fuera del comercio de los hombres (art. 1271.1 Cc), en la medida que ni se puede comerciar con personas ni se puede considerar a un niño como objeto de un contrato⁹. Asimismo, parece que también incumple los límites de la autonomía privada establecidos en el artículo 1255 Cc por ir en contra de la ley, como se acaba de exponer, la moral y el orden público, ya que en este último caso no hay que olvidar que las normas relativas al estado civil de las personas son indisponibles para los particulares.

Asimismo, se niega la posibilidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico un contrato de maternidad subrogada pues ello sería contrario a la dignidad de la madre gestante y de la del hijo, entendida en el sentido del artículo 10.1 CE; esto es, como fundamento del orden político y de la paz social¹¹. Y finalmente se apunta del peligro de la legalización de este contrato puesto que

⁸ En este punto la Ley española coincide con lo previsto en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos europeos. Así, cabe citar, entre otras, la Ley italiana nº 40 de 19 de febrero de 2004 que en su artículo 19.6 determina la nulidad de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución y establece que la filiación materna será la determinada por el parto. Sobre esta ley vid. BENITEZ DE ORTÚZAR, I.: “Breve comentario crítico a la Ley italiana sobre normas en materia de procreación médicamente asistida”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 84, 2004, p. 169– 198. Por su parte, el artículo 16.7 del Código Civil francés también aplica la nulidad a este tipo de contrato, calificando esta nulidad como de orden público (art. 16.9). Vid. BERROCAL LANZAROT, A.I.: “De nuevo sobre la reproducción asistida en España. Análisis jurídico sanitario de la Ley 14/2006, de 26 de mayo”, en *Revista de la Escuela de Medicina Legal*, octubre 2008, pp. 20 y ss. Asimismo, la Ley Federal alemana sobre la protección del embrión, de 13 de diciembre de 1990 obliga a que el embrión obtenido se implante en el útero de la mujer de la que se ha obtenido el óvulo (art. 1). Incluso en Suiza es la propia Constitución Federal la que en su artículo 119.2 la que prohíbe cualquier forma de maternidad de sustitución.

⁹ PÉREZ MONGE, M.: *La filiación derivada de Técnicas de reproducción asistida*. Ed. Centro de Estudios Registrales, Madrid 2002, pp. 346 y ss. LLEDÓ YAGÜE, F.: *Fecundación artificial y Derecho*. Ed. Tecnos, Madrid, 1988, p. 148.

¹⁰ VERDERA IZQUIERDO, B.: “Anotaciones a la Ley de reproducción Asistida”, en *Actualidad Civil*, nº 10, mayo 2007, p. 1117; CÁRCABA FERNÁNDEZ, Mª.: *Los problemas jurídicos planteados por las nuevas técnicas de procreación humana*, ed. Bosch, Barcelona, 1995.

podría incentivar en un contexto internacional la explotación de la mujer joven con escasos recursos¹¹.

Las consecuencias que se derivan de esta sanción de nulidad suponen que el comitente no pueda obligar a la mujer gestante a entregar al niño tras el parto (no procede acción de cumplimiento de contrato), ni exigirle indemnización alguna por los daños producidos como consecuencia de su incumplimiento¹². Es más, ni quisiera el comitente podrá exigirle a la mujer gestante que reintegre las cantidades que se le han entregado para hacer frente a los gastos generados por el embarazo por ser un contrato ilícito.

Por otro lado, es preciso señalar que en su último párrafo este artículo 10 deja “a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad interpuesta por el padre biológico, conforme a las reglas generales”.

LLEDÓ YAGÜE¹³ ha planteado la posibilidad de alcanzar el mismo resultado que el conseguido mediante la maternidad de sustitución haciendo uso de otro procedimiento legalmente previsto. Un hombre casado consiente para que se insemine con su material reproductor a una mujer distinta de la suya. Posteriormente, y una vez nacido el niño, la mujer casada solicita la adopción del hijo/a que su marido acaba de tener, sin necesidad de propuesta de idoneidad (art. 176.2 Cc), siempre que la madre gestante preste su asentimiento una vez transcurridos treinta días después del parto (art. 177. 2 Cc). Sin embargo, hay autores que califican de fraude de ley al citado procedimiento¹⁴. No creo que estemos ante un fraude de ley en la medida que el asentimiento de la madre gestante es voluntario y no existe vía legal para exigirselo, de modo que, aunque hubiera habido un acuerdo entre padre biológico y mujer gestante en virtud del cual exigirle este asentimiento en el procedimiento de adopción, si la mujer se niega a prestarlo en el último momento no existe posibilidad de reclamar legalmente el cumplimiento del contrato.

¹¹ QUIÑONES ESCÁMEZ, A. “Doble filiación de gemelos nacidos en el extranjero mediante maternidad subrogada”, en *In Dret, Revista para el análisis del Derecho*, julio de 2009, p.18. Pone de ejemplo las denominadas “granjas de mujeres” existentes en la India. Asimismo, pone en duda la validez de la prestación del consentimiento informado de las mismas cuando dichas mujeres carecen de capacidad de obrar en sus países.

¹² DÍAZ ROMERO, M.R.: “La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico”, en *Diario la Ley*, nº 7527, 14 de diciembre de 2010, p. 2. FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A.: “Eficacia jurídico registral del contrato de gestación subrogada”, en *Revista Aranzadi Doctrinal* nº 6/2011, 9 de septiembre, p. 2.

¹³ LLEDÓ YAGÜE, F.: “La Ley sobre las Técnicas de Reproducción Humana Asistida” en *Anuario de Derecho Civil*, 1998, Tomo II, pp. 1256 y sig.

¹⁴ VELA SÁNCHEZ, A. en su trabajo “La gestación por sustitución o maternidad subrogada: el derecho a recurrir a las madres de alquiler. Cuestiones que suscita la Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución”, en *Diario la Ley*, (Sección Doctrina), nº 7608, 15 de Abril de 2011, (La Ley 3302/2011), p. 5; LASARTE ÁLVAREZ, C.: *Principios de Derecho Civil*, Tomo VI, Derecho de Familia, ed. Marcial Pons, (novena edición), Madrid. 2010, p. 324.

2. La Resolución de la DGRN de 18 de febrero de 2009

No todos los ordenamientos jurídicos nacionales prohíben este contrato. Existen países, como es el caso de algunos Estados de Estados Unidos, que sí lo permiten¹⁵. Ha sido precisamente esta circunstancia la que ha tratado de ser aprovechada por nacionales españoles para inscribir en el Registro Civil español el nacimiento de niños nacidos en el extranjero tras haber celebrado un contrato de maternidad subrogada. Este caso ha sido tratado en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009 (RJ 2009/1735)¹⁶.

El supuesto planteado se refiere a una pareja de varones españoles casados en Valencia que solicitan la inscripción en el Registro Consular español en California del nacimiento de dos niños recién nacidos en California y que se determine a su favor su filiación¹⁷. Para ello el matrimonio aporta en tiempo y

¹⁵ Son pocos los países europeos que permiten la maternidad subrogada; sirvan de ejemplo el Reino Unido y Grecia. Grecia admite el contrato de maternidad por sustitución, si bien lo configura como un contrato gratuito en el que solo cabe que se abonen a la madre gestante las cantidades que compensen la pérdida de sus salarios durante el embarazo, parto y posparto, así como los gastos derivados de la gestación y el parto. Además obliga a que la madre gestante no sea la madre biológica, de modo que, los óvulos fecundados deben pertenecer a la mujer que no puede tener hijos y a su pareja. Y finalmente, exige que la filiación se establezca por resolución judicial. (Leyes 3089/2002 y 335/2005). Tanto la madre gestante como la madre biológica deben tener su residencia en Grecia y se debe demostrar que la madre biológica adolece de algún problema médico que le imposibilita tener descendencia.

Por su parte, en el Reino Unido la Ley sobre Embriología y fertilización Humana de 2008 solo admite la maternidad por sustitución en los casos en que, por razones médicas, sea la única vía para que una pareja pueda tener un hijo. En este sentido, se prohíbe la utilización de esta figura como objeto de un contrato oneroso y la intervención de agencias o intermediarios. Para poder acceder a la maternidad de sustitución, la pareja debe hacer una petición ante los Tribunales y en el caso de que se estime su pretensión sólo deberán abonar a la madre gestante los gastos que el embarazo, parto y posparto le hayan podido ocasionar. Una vez que la madre gestante da a luz, se establece una primera filiación del nacido a su favor y se abre un plazo de tiempo para que ésta pueda revocar su decisión inicial. En el caso de que lo haga, el Juez emitirá una nueva resolución en la que consta la filiación a favor de la pareja que ha aportado su material reproductor. Para que la pareja pueda hacer uso de este procedimiento de maternidad subrogada es necesario que estén al menos uno de ellos domiciliado en el Reino Unido, en las Islas del Canal o en la Isla de Man.

¹⁶ La DGRN se ha pronunciado sobre la reproducción asistida en el caso de parejas homosexuales en dos resoluciones anteriores. No obstante, conviene indicar que estas resoluciones son anteriores a la modificación del artículo 7.3 de la LTRHA y en consecuencia a la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la posibilidad de determinar la filiación matrimonial respecto del cónyuge femenino que no ha dado a luz. Tanto en la Resolución de 5 de junio de 2006 (LALEY 84038/2006) como en la Resolución de 11 de enero de 2007 (LALEY 357013/2007) se solicitan sendas inscripciones de filiación a favor de dos mujeres que son o bien la pareja de hecho o bien el cónyuge femenino de aquellas otras que han dado a luz como resultado de la utilización de las técnicas de reproducción asistida. En ambas resoluciones se señala que la vía para que pueda determinarse la filiación a favor de la mujer que no ha dado luz al niño es la vía de la adopción, ya que el principio de veracidad biológica que inspira nuestro Ordenamiento en materia de filiación se opone frontalmente a que, determinada la maternidad por el hecho del parto, puede sobrevenir otro reconocimiento de la maternidad por otra mujer.

¹⁷ En el Estado de California los contratos de maternidad subrogada no están expresamente contemplados en la Ley. Es, sin embargo, la jurisprudencia de su Tribunal Supremo la que protege los intereses de los padres comitentes sobre los de la madre gestante, puesto que ésta no podrá revocar el contrato previamente firmado.

forma, la certificación registral extranjera en la que se constata la inscripción del nacimiento de los menores y la filiación determinada a favor de los varones. Estas certificaciones registrales extranjeras habían sido emitidas por la autoridad administrativa del Registro de California (*The California Office of Vital Records*). Para la emisión de estos certificados es necesario que previamente haya recaído una resolución judicial que establezca la filiación de los menores a favor de los padres varones y que ordene a la autoridad administrativa que emita los certificados tal y como se dispone en la *Section 7633, California Family Code*. Por tanto, es la sentencia judicial la que determina la filiación de los menores, de modo que en las certificaciones ya no figura la madre biológica, ni la madre que da a luz al bebé, en el caso que sean distintas (*Section 7630.3 f y 7650 a California Family Code*)¹⁸. En el presente caso ha resultado probado que el nacimiento de los niños se produce como consecuencia de la existencia de un contrato de maternidad subrogada ya que la pareja solicitante está integrada por dos personas del mismo sexo masculino¹⁹. Estamos en definitiva ante un supuesto de inseminación heteróloga con contribución de donante masculino, siendo los óvulos fecundados de la madre gestante²⁰.

El encargado del Registro Civil en su Auto de 10 de noviembre de 2008 deniega la inscripción solicitada fundamentando su negativa en la existencia del artículo 10 LTRHA y en la prohibición de la celebración de contrato de maternidad subrogada. Este Auto se recurre ante la Dirección de los Registros y del Notariado (en adelante DGRN) quien estima la pretensión de los recurrentes en su Resolución de 18 de febrero de 2009 y en consecuencia concede la inscripción en el Registro del nacimiento de los bebés y su filiación a favor de la pareja de varones.

El fundamento en el que sustenta su Resolución lo encuentra la DGRN en el artículo 81 del Reglamento del Registro Civil, que establece que “*El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o notarial, es título para inscribir el hecho de que da fe. También lo es el documento auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo a las Leyes o a los Tratados internacionales*”. En virtud de este precepto entiende la DGRN que la misión del Encargado del Registro civil consular se tiene que limitar a realizar un control formal de legalidad de la decisión registral extranjera en forma

¹⁸ Vid. sobre la posibilidad de establecer una doble maternidad FARNOS AMORÓS E.: Y GARRIGA GORINA M.: “¿Madres? Pueden ser más de una”, en *In Dret, Revista para el análisis del Derecho*, nº4 2005, pp. 1-7.

¹⁹ Un estudio sobre la situación de los contratos de maternidad subrogada en Estados Unidos lo realiza FARNÓS AMORÓS, E.: “Inscripción en España de la filiación derivada del acceso a la maternidad subrogada en California” en *In Dret, Revista para el análisis del Derecho*, enero de 2010, pp. 1-12.

²⁰ DE LA IGLESIA MONJE, M.I.: “Actualidad de la gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico. Inscripción de los hijos nacidos en el extranjero mediante dicha técnica”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 725, mayo 2001, p. 167. y “Novedades en torno a la filiación, el consentimiento y la reproducción asistida en el supuesto de parejas homosexuales femeninas”, en *Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias*, coordinado por Francisco Javier Gómez Gállego y otros, ed. Aranzadi, 2008, pp. 471 a 489.

de certificación registral, sin entrar a valorar si el contenido de ésta se adecua o no al derecho positivo de nuestro ordenamiento jurídico²¹. Esto es, el Registrador debe comprobar que existe una “decisión” válida adoptada por las autoridades extranjeras competentes y que en ella se constata el nacimiento y la filiación de los nacidos. Constatado esto, la validez extraterritorial de las decisiones extranjeras en España obliga a inscribir la certificación sin entrar a analizar el contenido de la misma. Por consiguiente, la DGRN considera que son los Tribunales los que deben resolver las cuestiones de fondo que plantea el supuesto relativo a la filiación de los bebés y a la validez o no del contrato.

Las razones que la DGRN esgrime para fundamentar su decisión son las siguientes: En primer lugar, cada Estado dispone de su propio ordenamiento jurídico y de su sistema de resolución de conflictos de Derecho Internacional Privado que, por supuesto, no tiene por qué coincidir con el existente en el ordenamiento español²².

En segundo lugar, la DGRN aboga por el cumplimiento del principio de seguridad jurídica (art. 9 CE) en el contexto internacional, ya que desconocer este principio supondría que una situación jurídica válidamente creada en un Estado (California) no tendría efectos en otro distinto, como es España. Por esta causa, la posición jurídica de las personas sería distinta en función del Estado en el que estuvieran, lo cuál contradiría el principio de coherencia de reglamentación de las situaciones privadas internacionales y su continuidad en el espacio²³.

En tercer lugar, se trata de evitar que los particulares tengan que realizar una nueva solicitud ante las autoridades españolas por carecer de eficacia la certificación extranjera y en consecuencia que nazca la obligación de instar un doble procedimiento para conseguir la misma inscripción de nacimiento y la de filiación tanto en el Estado de California como en España.

Asimismo, la Dirección general considera que si nuestro ordenamiento jurídico admite que se establezca la filiación adoptiva a favor de dos varones a la misma solución deberíamos llegar en el caso de los hijos naturales, en aras del cumplimiento del principio de igualdad entre ambos supuestos.

Finalmente, señala que si nuestro Derecho permite la inscripción de la filiación a favor de dos mujeres, es preciso permitir que la filiación conste a favor de dos hombres, ya que lo contrario supondría discriminación por razón de sexo.

²¹ DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: “Inscripción de hijos nacidos mediante gestación por sustitución (a propósito de la Sentencia del Juzgado de Primer Instancia número 15 de Valencia, de 15 de septiembre de 2010), en *Diario la Ley*, (Sección Tribuna), nº 7501, noviembre de 2010, p. 2.

²² Un análisis exhaustivo del supuesto desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado lo realiza la profesora QUIÑONES ESCÁMEZ, A. *loc. cit.*, “Doble filiación de gemelos (...)”, pp. 1-42. CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Gestación por sustitución y Derecho Internacional Privado: consideraciones en torno a la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009”, en *Cuadernos de Derecho transnacional*, Vol. 1, nº 2, 2009, pp. 294-319.

²³ DÍAZ ROMERO, M.R.: “La gestación por sustitución (...)”, *loc. cit.*, p. 5.

Por otra parte, la DGRN exige, a tenor del artículo 81 RRC, que la certificación registral extranjera cumpla una serie de requisitos para que pueda tener acceso al Registro y en consecuencia despliegue efectos en España. Son precisamente estos requisitos los que, según la DGRN, debe comprobar el Registrador para proceder a la inscripción en el Registro del documento extranjero.

En primer lugar, la certificación registral extranjera debe ser un “documento auténtico”; esto es un documento autorizado por una autoridad extranjera, siguiendo los requisitos que se exijan en el país extranjero para que sea considerado documento público (art. 323.2 LEC). Asimismo, se exige que el documento se acompañe de la legalización correspondiente o apostilla y los demás requisitos necesarios para su autenticidad en España. Y también se requiere que vaya acompañado de una traducción o copia suficiente hecha por el Notario, Cónsul, traductor u otro órgano o funcionario competente (art. 86 RRC).

En segundo lugar, la certificación de registro extranjero debe ser “regular y auténtica, de modo que el asiento que se certifica en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española”. Esto se traduce en la necesidad de que la autoridad extranjera que ha expedido la certificación cumpla funciones análogas a las que realiza la autoridad española con la misma competencia. En este sentido, la autoridad extranjera, cumpliendo la legalidad existente, ha constatado una realidad; el nacimiento de dos bebés y la renuncia de la filiación de la madre biológica a favor de una pareja de varones. Consecuencia de esta circunstancia ha procedido a la inscripción en el Registro.

Finalmente, es necesario que la certificación extranjera no vulnere el denominado “orden público internacional español”, lo cual a juicio de la DGRN no ocurre entre otras razones, por la necesidad de dar respuesta al denominado “interés superior del menor” en cumplimiento de lo establecido por el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989²⁴. En este sentido, se alude al correcto funcionamiento de los distintos Registros nacionales y al cumplimiento del Derecho fundamental a la identidad de los menores (arts. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño) que no puede variar en los casos en que nazcan en un país y residan en otro distinto. Si ello no se cumpliera en nuestro país, supondría dejar la existencia de menores privados de una filiación inscrita en el Registro civil español. Desde mi punto de vista, es este interés superior del menor lo que justifica realmente la decisión adoptada por

²⁴ La Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por España el 6 de diciembre de 1990 en vigor en nuestro país el 5 de enero de 1991. Este artículo establece lo siguiente: 1. *En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que lo que se atenderá será el interés superior del niño.* 2. *Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, con este fin, tomarán todas la medidas legislativas y administrativas adecuadas”.*

la DGRN, subordinando, explícita o implícitamente, los demás argumentos a esta idea e ignorando así la legalidad vigente en el ordenamiento jurídico español²⁵.

3. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valencia de 15 de septiembre de 2010

La citada resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia dictó la sentencia de 15 de septiembre de 2010 (AC/ 2010/1707). En esta sentencia se revoca la decisión de la DGRN aplicando el principio de jerarquía normativa, ya que el Juez considera preferente la aplicación del artículo 23 de la LRC frente a la de los artículos. 81 y 83 del RRC. En este sentido, el precepto legal establece que *“Las inscripciones podrán practicarse, sin necesidad de previo expediente, por certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros, siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española”*. Este artículo sí obliga al Registrador a realizar control de fondo del contenido de la certificación extranjera, puesto que se tiene que asegurar de que no incurra en contradicción con la Ley española, lo cual en este caso sí ocurre, al contradecir el contenido del art. 10 1 LTRHA. Parafraseando lo que establece la sentencia *“el encargado debería verificar que realmente ambos solicitantes son los padres de los menores, cuya inscripción se pretende, lo que no es ni puede serlo a efectos materiales, pues biológicamente resulta imposible”*.

Asimismo, esta sentencia despeja cualquier duda respecto del principio de no discriminación. La DGRN consideraba que si se permitía la inscripción de la filiación a favor de dos mujeres casadas, también se tendría que permitir la filiación favor de dos varones casados. A este respecto, considera el Juez que la nulidad del contrato se deriva de las consecuencias que se producen tras el alumbramiento, con independencia del sexo de las personas, distintas de la madre gestante, que pretenden ostentar la filiación del nacido, por la existencia de un contrato de maternidad por sustitución. Y además declara la existencia del principio de no disponibilidad del estado civil de las personas y que este principio quebraría si se pudieran modificar las normas que determinan el nacimiento de la relación paterno filial y la atribución de la condición jurídica de progenitor e hijo.

Por otra parte, resulta llamativo que esta sentencia haga un guiño a la posibilidad de que el matrimonio de varones pueda alcanzar el mismo resultado, que se les ha negado, utilizando otros mecanismos ofrecidos por nuestro ordenamiento jurídico. Parece que esta alusión se refiere a la posibilidad, apuntada anteriormente, de que aquel de los varones que hubiera aportado su material reproductor reclamara la paternidad de los bebés, haciendo uso de la posibilidad que le brinda el último párrafo del artículo 10 de la LTRHA y posteriormente su cónyuge iniciara un procedimiento de adopción siempre que contara con el asentimiento de la madre gestante.

²⁵ Vid. las duras críticas que respecto a esta resolución vierte BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R.: “Hijos de made in California” en *Aranzadi Civil*, nº 3/2009 (BIB 2009/411), pp. 1-3.

Algún autor²⁶, considera que ya que mediante la vía de la adopción se puede alcanzar el mismo resultado que el que se prohíbe mediante el contrato de maternidad subrogada, no tiene sentido prohibir éste. No obstante, yo creo que a pesar de que el resultado sea el mismo, las vías para lograrlo no tienen comparación, en la medida que mientras que en el contrato de gestación por sustitución se está pactando sobre la capacidad de procreación de una mujer, en el procedimiento de adopción el recién nacido es hijo de la madre quién en última instancia puede negarse a prestar el asentimiento, con lo que no se produciría tal adopción.

4. La Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010

La DGRN ha dictado una Instrucción de fecha de 5 de octubre de 2010 sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución²⁷. En esta instrucción, si bien cambia el criterio mantenido en la resolución de 18 de febrero de 2009, continúa admitiendo la posibilidad de inscribir en el Registro civil los nacimientos producidos en el extranjero consecuencia de un contrato de gestación por sustitución, siempre que al menos uno de sus solicitantes sea español. La razón que justifica esta decisión de la DGRN vuelve a ser la protección del interés del menor, *“facilitando la comunidad transfronteriza de una relación de filiación declarada por un Tribunal extranjero, siempre que tal resolución sea reconocida por España”*. En definitiva, no coincide con el criterio de su Resolución de 2008, pero facilita la inscripción de los nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución²⁸.

En este sentido esta instrucción exige, como requisito previo, para solicitar la inscripción de la filiación en el Registro civil la presentación ante el Encargado de una resolución judicial dictada por un Tribunal extranjero competente en la que se establezca la filiación del nacido. Por tanto, se observa cómo, a diferencia de la resolución de 2009, ya no es suficiente para la inscripción en el Registro civil la certificación registral emitida por la autoridad competente extranjera o la simple declaración, acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la madre gestante.

Son tres los argumentos que esgrime la DGRN para exigir la presentación de la resolución judicial. En primer lugar, la existencia de una resolución judicial en el país de origen permite el control judicial de los requisitos de perfección y contenido del contrato de maternidad subrogada y su adecuación a la ley del país en el que se ha formalizado y la protección de los intereses del menor y de la madre gestante. En segundo lugar, también permite un control de la capacidad jurídica y de obrar de la mujer gestante, que su consentimiento contractual ha sido prestado libre y voluntariamente, así como la posibilidad de su revocación. Y

²⁶ DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.; “Inscripción de los hijos (...)”, *loc. cit.*; p. 7.

²⁷ BOE, nº 243, de 7 de octubre de 2010.

²⁸ SALAS CARCELER, A.: “El registro civil español y la filiación surgida de la gestación por sustitución” en *Revista Aranzadi Doctrinal* (BIB 2010/2946), nº 10/2011, p. 3.

finalmente, trata de evitar que el contrato de maternidad subrogada sirva de cobertura legal al tráfico internacional de menores.

Pues bien, si la resolución judicial extranjera que determina la filiación del menor ha sido dictada en un procedimiento contencioso será necesario instar por el particular el *exequátur* ante los Juzgados de Primera Instancia (arts. 954 Y 955 LEC). En este caso deberá presentarse ante el Encargado del Registro Civil, la solicitud de inscripción, así como el Auto que pone fin al *exequátur*

Pero si la resolución judicial ha sido dictada en un procedimiento equiparable a un procedimiento español de jurisdicción voluntaria, únicamente se exige que el Encargado del Registro Civil realice un control incidental de la misma asegurándose se cumplen los siguientes aspectos; la regularidad y autenticidad formal de la resolución; que la competencia del Tribunal extranjero que ha dictado la resolución se fundamenta en criterios equivalentes a los existentes en la ley española; que los derechos procesales de las partes interesadas se han garantizado debidamente; que se ha protegido debidamente el interés del menor y los derechos de la madre gestante y finalmente, que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados son irrevocables o sometidos a un plazo de revocación.

Como podemos observar la DGRN en una instrucción que, curiosamente ha sido dictada pocos días después de la sentencia del Juzgado de Primera instancia de Valencia, vuelve a utilizar el principio general de la protección del interés del menor para justificar una posición similar a la mantenida en la Resolución de 2009 y permitir así, lo que a mi juicio supone un fraude de Ley, esto es la posibilidad de inscribir en el Registro civil el nacimiento y la filiación a favor de un español de los niños nacidos en el extranjero como consecuencia de la existencia de un contrato de maternidad subrogada. Por ello, considero que el contenido de la citada resolución no respeta la regulación contenida en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que por vía reglamentaria pretende resolver un problema para el que no tiene competencia²⁹.

Se ha tratado de justificar esta posición de la DGRN alegando la concurrencia de un principio general como es el de “orden público atenuado” que permite reconocer ciertos efectos jurídicos en España a instituciones desconocidas en nuestro Derecho. Si bien, como afirma DE VERDA Y BEAMONTE, lo que realmente hace la Instrucción no es reconocer ciertos efectos a la filiación determinada en un país extranjero consecuencia de un contrato de gestación por sustitución, sino que está

²⁹ En el mismo sentido, FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A.: “Eficacia jurídico registral del contrato de gestación subrogada”, en *Revista Aranzadi Doctrinal* nº 6/2011, 9 de septiembre., pp. 15-15 Cfr. VELA SÁNCHEZ, A.: “La gestación por sustitución (...)” pp. 6 y ss, quien considera que la instrucción sienta las premisas necesarias para modificar nuestro ordenamiento jurídico e introducir el contrato de maternidad subrogada. En este sentido, realiza una propuesta relativa al que podría ser el régimen jurídico del contrato de gestación por sustitución, estableciendo como requisito *sine qua non* que una de las partes sea aportante del material genético necesario para la reproducción. Vid, también LASARTE ÁLVAREZ, C.: “La reproducción asistida y la prohibición legal de maternidad subrogada admitida de hecho por vía reglamentaria”, en *Diario la Ley*, (Sección Doctrina), nº 7777, enero de 2012 (La Ley 22179/2011), p. 12.

introduciendo plenamente en el Derecho español esta posibilidad, lo cual vuelve a incidir en la idea de la existencia de un fraude de ley³⁰.

No obstante, cabe señalar que el hecho de que la Resolución de la DGRN infrinja claramente el principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 9.3 de la CE, justifica que se predique su nulidad³¹.

5. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de Noviembre de 2011

La Audiencia Provincial de Valencia (sección 10ª) ha resuelto recientemente el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valencia de 15 de septiembre de 2010, que dejó sin efecto la inscripción de nacimiento ordenada por la DGRN en el Registro Civil Consular de Los Ángeles de los dos menores, nacidos el día 24 de octubre de 2.008 con las menciones de filiación de la que resulta que son hijos de los demandados, y acordó la cancelación de la mencionada inscripción.

La Audiencia Provincial desestima el recurso en su sentencia de 23 de noviembre de 2011 (Sentencia nº 826/2011, de 23 de noviembre, JUR/2011/420142) sobre la base de las siguientes razones.

En primer lugar, hace prevalecer el artículo 23 de la LRC sobre el contenido de los artículos 81 y 83 del RRC en virtud del principio de jerarquía normativa reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución española³². Por ello, considera, al igual que el Juzgado de Instancia, que previamente a acordar la inscripción de la certificación extranjera el Registrador tiene que realizar un control de legalidad de la misma. Y en este caso ha quedado probado que los certificados de nacimiento expedidos por el Condado de San Diego, situado en el Estado de California en los Estados Unidos de América, en los que ambos demandados figuran como padres de los nacidos se expiden después de que se haya celebrado un contrato de gestación por sustitución, contrato de gestación prohibido por el artículo 10 TRLRA. Por ello, no se admite la inscripción.

En segundo lugar, y desde el punto de vista del llamado método del reconocimiento de las decisiones extranjeras³³, alegado por la parte recurrente, existen importantes obstáculos a la inscripción en Registro Civil español de la

³⁰ DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "Inscripción de hijos (...)", ; *loc. cit.*; p. 11.

³¹ VELA SÁNCHEZ, A.J.: "De nuevo sobre la regulación del convenio de gestación por sustitución o de maternidad subrogada en España". A propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011. en *Diario La ley* (Sección Doctrina), nº 7815, marzo de 2012 (La Ley 2208/2012), p. 1.

³² Hay que recordar que el artículo 23 LRC exige que realice un control sobre la veracidad del hecho que se pretende inscribir y sobre su adecuación a nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, los artículos 81 y 83 RRC solo obligan al Registradora a realizar un control formal de la certificación que se pretende inscribir.

³³ Este método considera las certificaciones registrales extranjeras como auténticas decisiones susceptibles de ser incorporadas al ordenamiento español, con los efectos en cada caso pertinentes,

filiación. Estos obstáculos radican en la infracción por la certificación registral californiana del orden público internacional español en aplicación de lo establecido por el artículo 954-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881. La existencia de este orden público español viene a coincidir con las razones que llevaron al legislador español a prohibir el contrato de gestación subrogada o por sustitución y que no son otras que el respecto a los principios relativos a que la persona humana no puede ser objeto del comercio de los hombres, o lo que es lo mismo, que el niño no puede ser objeto de transacción y en definitiva al respecto a la propia dignidad de la persona.

Incluso la Audiencia califica al artículo 10 LTRHA de norma de policía, en el sentido del artículo 9-1 del Reglamento 593/2008 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales: "una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, basta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación".

En tercer lugar, los recurrentes alegan la existencia de la Instrucción de 7 de octubre de 2.010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado que establece la posibilidad de la inscripción del nacimiento de menores en el extranjero como consecuencia del uso de técnicas de gestación por sustitución mediante la presentación de una resolución judicial en la que se determine la filiación del nacido, o si la resolución judicial tiene su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria, mediante el reconocimiento incidental ante el encargado del Registro, siempre previa la constatación de que se ha respetado el interés del menor y los derechos de la madre contratante gestante, así como que conste su identidad, además de otros requisitos de carácter formal y procesal. En este caso, la Audiencia considera que a pesar de que la certificación extranjera ha sido expedida por orden de una previa resolución judicial, dicha resolución judicial no consta en el procedimiento, ni tampoco la identidad de la madre gestante, por lo que no es posible afirmar, por lo que no sería posible en ningún caso inscribir la filiación en el Registro Civil.

Además, añade el Tribunal la inexistencia de vinculación entre el matrimonio de varones y el Estado de California que ha dictado la decisión, porque los dos son ciudadanos españoles, residentes en España, que han buscado la jurisdicción extranjera mediante la celebración de un contrato de gestación por sustitución con una mujer californiana, lo cual posibilitó a las autoridades de California determinar la filiación de los menores nacidos allí, aplicando sus propias normas de conflicto y no las españolas.

En cuarto lugar, los recurrentes alegan que se ha infringido el principio de igualdad y de prohibición de discriminación por razón de sexo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, en cuanto que si el artículo 7-3 LTRHA

y que resultan de la aplicación de la norma de conflicto propia del Estado de origen, siempre que la decisión extranjera coincida con la que se hubiera adoptado aplicando el Derecho español.

permite la inscripción en el Registro de la filiación por naturaleza a favor de dos mujeres casadas, se debería permitir la inscripción de la filiación a favor de dos hombres casados. Sin embargo el Tribunal, con razón, considera que por la propia naturaleza de la raza humana las parejas de dos mujeres no necesitan acudir a otra mujer a la que encomendar la gestación. De este modo, no puede considerarse discriminatorio el tratar desigualmente lo que es desigual. Por otro lado, en el supuesto de que una pareja de mujeres acudiera a la gestación por sustitución también le sería aplicable la prohibición, de modo que la misma no implica una discriminación por razón de sexo, sino que se fundamenta en la modalidad utilizada para la procreación de los menores, que la ley española considera nula.

En la misma línea el Tribunal no acepta la equiparación entre el supuesto que nos ocupa y los casos de instituciones no admisibles en el Derecho español, que sin embargo producen determinados efectos derivados de ellas, como es el caso de la poligamia, que puede dar lugar a la percepción de pensiones de viudedad (orden público relativo). Entiende que en el caso que nos ocupa lo que se solicita es la inscripción en el Registro Civil de algo mucho más vinculado al contrato prohibido, como es la filiación a que da lugar lo cual constituye su causa para los comitentes y el objeto de la prestación de la madre gestante, conforme al artículo 1.274 del Código Civil español, y por ello, un elemento esencial del mismo.

Finalmente, la Audiencia defiende que es cierto que toda resolución que afecte a los menores de edad debe tener como guía el principio del interés del menor reconocido pero la satisfacción de dicho interés no puede conseguirse infringiendo la ley, máxime cuando la propia ley española ofrece cauces para la inscripción de la filiación de los menores a favor de los demandados. En este caso está haciendo una clara alusión a la posibilidad de la adopción anteriormente mencionada.

En definitiva, de la lectura de la sentencia se extrae la doctrina, que comparto, de impedir la inscripción de nacimiento de los menores, cuando éste se ha producido utilizando la figura de la gestación por sustitución, prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta sentencia no deje de ser la respuesta a un caso puntual. El Ministerio Fiscal deberá ponerse a trabajar para que otros casos como este o similares no alcancen el fin deseado de la inscripción en el Registro, a la vista de la posición actual adoptada por la DGRN.

III. BIBLIOGRAFÍA

BENITEZ DE ORTÚZAR, I. (2004): “Breve comentario crítico a la Ley italiana sobre normas en materia de procreación médicamente asistida”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 84.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R. (2009): “Hijos de made in California” en *Aranzadi Civil*, nº 3/2009 (BIB 2009/411).

- BERROCAL LANZAROT, A.I. (2008): “De nuevo sobre la reproducción asistida en España. Análisis jurídico sanitario de la Ley 14/2006, de 26 de mayo”, en *Revista de la Escuela de Medicina Legal*, octubre 2008.
- CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2009): “Gestación por sustitución y Derecho Internacional Privado: consideraciones en torno a la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009”, en *Cuadernos de Derecho transnacional*, Vol. 1, nº 2.
- CÁRCABA FERNÁNDEZ, M^a. (1995): *Los problemas jurídicos planteados por las nuevas técnicas de procreación humana*, ed. Bosch, Barcelona.
- DE LA IGLESIA MONJE, M.I. (2001): “Actualidad de la gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico. Inscripción de los hijos nacidos en el extranjero mediante dicha técnica”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 725.
- DE LA IGLESIA MONJE, M.I. (2008): “Novedades en torno a la filiación, el consentimiento y la reproducción asistida en el supuesto de parejas homosexuales femeninas”, en *Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias*, coordinado por Francisco Javier Gómez Gállico y otros, ed. Aranzadi.
- DE VERDA Y BEAMONTE, J.R. (2010): “Inscripción de hijos nacidos mediante gestación por sustitución (a propósito de la Sentencia del Juzgado de Primer Instancia número 15 de Valencia, de 15 de septiembre de 2010)”, en *Diario la Ley*, (Sección Tribuna), nº 7501.
- DÍAZ ROMERO, M.R. (2010): “La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico”, en *Diario la Ley*, nº 7527.
- ESPINAR VICENTE, J.M. (2011): “Algunas reflexiones sobre la nueva Ley del Registro civil” en *Diario la Ley* (Sección Doctrina), nº 7771, enero 2012. (LA LEY 22116/2011).
- FARNOS AMORÓS E. Y GARRIGA GORINA M. (2005): “¿Madres? Pueden ser más de una”, en *In Dret, Revista para el análisis del Derecho*, nº 4.
- FARNOS AMORÓS E. (2010) “Inscripción en España de la filiación derivada del acceso a la maternidad subrogada en California” en *In Dret, Revista para el análisis del Derecho*, enero de 2010.
- FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A. (2011): “Eficacia jurídico registral del contrato de gestación subrogada”, en *Revista Aranzadi Doctrinal* nº 6.
- LASARTE ÁLVAREZ, C. (2012): “La reproducción asistida y la prohibición legal de maternidad subrogada admitida de hecho por vía reglamentaria”, en *Diario la Ley*, (Sección Doctrina), nº 7777.
- LASARTE ÁLVAREZ, C. (2010): *Principios de Derecho Civil*, Tomo VI, Derecho de Familia, ed. Marcial Pons, (novena edición), Madrid.

- LLEDÓ YAGÜE, F. (1988): *Fecundación artificial y Derecho*. Ed. Tecnos, Madrid.
- LLEDÓ YAGÜE, F. (1988): “La Ley sobre las Técnicas de Reproducción Humana Asistida” en *Anuario de Derecho Civil*, 1998, Tomo II
- PÉREZ MONGE, M. (2002): *La filiación derivada de Técnicas de reproducción asistida*. Ed. Centro de Estudios Registrales, Madrid.
- QUÍÑONES ESCÁMEZ, A. (2009): “Doble filiación de gemelos nacidos en el extranjero mediante maternidad subrogada”, en *In Dret, Revista para el análisis del Derecho*, julio de 2009.
- SALAS CARCELER, A. (2011): “El registro civil español y la filiación surgida de la gestación por sustitución” en *Revista Aranzadi Doctrinal* (BIB 2010/2946), nº 10.
- VELA SÁNCHEZ, A. (2011): “La gestación por sustitución o maternidad subrogada: el derecho a recurrir a las madres de alquiler. Cuestiones que suscita la Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución”, en *Diario la Ley*, (Sección Doctrina), nº 7608. (La Ley 3302/2011).
- VELA SÁNCHEZ, A.J. (2012): “De nuevo sobre la regulación del convenio de gestación por sustitución o de maternidad subrogada en España”. A propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011. en *Diario La ley* (Sección Doctrina), nº 7815, (La Ley 2208/2012).
- VERDERA IZQUIERDO, B. (2007): “Anotaciones a la Ley de reproducción Asistida”, en *Actualidad Civil*, nº 10.

